

**VECINOS, CIUDADANOS, GENTE...
CONFLICTO SOCIAL NO CLASISTA Y RÉGIMEN
POLÍTICO EN ARGENTINA (2003 – 2007)**

Neighbors, Citizens, People ...

Non-class social conflict and political regime in Argentina (2003 - 2007)

ADRIÁN PIVA^[1]

Resumen

La estructuración de mecanismos institucionales de internalización del conflicto social constituye un aspecto nodal de la construcción de una hegemonía.

Desde esta perspectiva, como parte de una aproximación general a la relación entre estado, hegemonía y conflicto social desde 2003 en Argentina, este artículo intenta abstraer los principales rasgos del conjunto heterogéneo de conflictos constituidos fuera del mundo laboral y articulados por sujetos con identidades no clasistas desde el punto de vista de su relación con la recomposición de la legitimidad del poder político y de las capacidades institucionales de interiorización del conflicto social entre 2003 y 2007.

Palabras clave: Argentina, Hegemonía, régimen político, conflicto social

Abstract

The structuring of institutional mechanisms for internalization of social conflict is a nodal aspect of the construction of hegemony.

From this perspective, as part of a general approach to the relationship

1 UBA/UNQ/CONICET, Domicilio: Chacabuco 1166 2º A CABA. Tel: 11 4307 0496. Correo electrónico: apiva72@hotmail.com. El autor es Sociólogo (UBA) y Doctor en Ciencias Sociales (UNQ). Se desempeña actualmente como docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes y es Investigador Asistente de CONICET. Se ha especializado en el estudio de las luchas sociales, la hegemonía y el estado en Argentina desde 1989 y es autor de diversas publicaciones sobre el tema.

between state, hegemony and social conflict since 2003 in Argentina, this article attempts to abstract the main features of the heterogeneous set of conflicts constituted outside the workplace and articulated by subjects with non-class identities from the standpoint of its relation to the recomposition of the legitimacy of political power and institutional capacities of internalization of social conflict between 2003 and 2007.

Key – words: Argentina, Hegemony, Political Regime, Social conflict.

Recibido
19/09/11

Aceptado
15/05/12

VECINOS, CIUDADANOS, GENTE... CONFLICTO SOCIAL NO CLASISTA Y RÉGIMEN POLÍTICO EN ARGENTINA (2003 – 2007)^[2]

Introducción

Desde mediados de los años '90 los estudios sobre conflicto social han crecido notablemente en Argentina. Este interés ha estado parcialmente asociado a la emergencia en el plano internacional de las tesis del fin de la clase obrera, a la aparición de nuevos sujetos y formas de lucha y al desarrollo de las teorías de los movimientos sociales y de la acción colectiva. Pero fundamentalmente han ejercido atracción sobre los investigadores un conjunto de transformaciones en la dinámica, la evolución cuantitativa, las formas y los sujetos de los conflictos en el escenario local y regional.

Entre ellas, en la Argentina de los '90, se destacó la irrupción de un conjunto heterogéneo de conflictos cuyos sujetos asumieron identidades no clasistas y que se desarrollaron fuera del mundo laboral. Si bien la mera existencia e importancia de movimientos de protesta no clasistas no es un fenómeno que merezca destacarse como una especificidad de los '90 - pensemos en el movimiento de DDHH en los '80 o en el conflicto sobre educación laica o libre en los '60-, sí lo es que desplacen del centro del conflicto al conflicto de clases. Por lo menos lo es en la Argentina de los últimos 50 años. En este sentido, este fenómeno - si bien a nuestro juicio sobreestimado (Ver Piva, 2011) - sumado a la emergencia del movimiento piquetero, atrajo la curiosidad de los investigadores y brindó el espacio en el que se desarrollaron los debates sobre el fin del paradigma del movimiento obrero, la pérdida de centralidad del trabajo en la constitución de identidades colectivas, etc.

Desde 2003 la mayoría de los investigadores ha registrado una recuperación

² Agradezco a los evaluadores sus valiosos comentarios.

del conflicto obrero (Por ejemplo Svampa, 2008 y 2008b; Scolnik, 2009; Campione, 2008; Atzeni y Ghigliani, 2008). Un mero conteo de algunos de esos conflictos lo ejemplifica: los conflictos protagonizados por telefónicos de la regional Buenos Aires entre 2004 y 2006 por recomposición salarial y por el pase a planta de tercerizados en servicios de atención telefónica que involucraron, en todos los casos, tomas de edificios, amenazas de interrupción de las comunicaciones telefónicas y una larga duración; los conflictos de subterráneos entre 2003 y 2007, por la jornada de 6 horas, por recomposición salarial y, finalmente, por el pase a planta de tercerizados que, además, del impacto en el movimiento de automóviles y personas en la ciudad, incluyeron ocupaciones, cortes de vías, etc.; el largo plan de lucha del Hospital Garrahan durante 2005; la huelga de petroleros de Santa Cruz en 2006, con cortes de ruta y ocupaciones -en cuyo marco murió de un disparo el policía Sayago-; las huelgas docentes en Neuquén -donde fue asesinado el maestro Fuentealba- y en Santa Cruz en 2007, caracterizadas también por su duración y la apelación a cortes de rutas y ocupaciones; el conflicto de Kraft en 2009, que incluyó la ocupación prolongada de la planta y cortes sorpresivos de la panamericana; los conflictos de petroleros de Santa Cruz en 2011, en el marco del cual se sucedieron ocupaciones, cortes de ruta e interrupción del suministro de combustible, etc..

Sin embargo, los conflictos constituidos fuera del mundo laboral y articulados por sujetos con identidades no clasistas han seguido siendo cuantitativamente importantes y políticamente relevantes. Protestas y demandas tan heterogéneas como las de las asambleas ambientalistas -particularmente el caso de Gualeguaychú-, las de “ciudadanos” y “vecinos” contra la inseguridad -fundamentalmente en el apogeo de Blumberg entre 2004 y principios de 2006-, las del movimiento de Cro-Magnon, las de usuarios ferroviarios, sobre todo entre 2005 y 2007, etc., constituyeron hechos políticos significativos. Diversos investigadores los han registrado (Svampa, 2008 y 2008b; Antón et al, 2010), pero, como suele suceder, la recuperación de la centralidad política y social del conflicto sindical dio más espacio al conflicto obrero y opacó a las estrellas de otrora.

En nuestro caso, la atención ha estado puesta en la cuestión de la articulación de una hegemonía y de una forma de estado en Argentina

desde 1989. Entendemos la hegemonía como un modo histórico de la lucha de clases que se caracteriza, en primer lugar, por la capacidad de la burguesía de presentar las condiciones para su propia expansión como condiciones para la “expansión de las energías nacionales” (Gramsci, 1998: 58). Esto es, de presentar las condiciones de su reproducción particular como condiciones de la reproducción del conjunto social.^[3] En segundo lugar, dicha potencialidad hegemónica, sólo se realiza en “formas de estado” determinadas. En este sentido, en el núcleo de la construcción de una hegemonía se halla la estabilización de mecanismos de internalización de las contradicciones sociales mediante la captura estatal de los procesos de lucha, su internalización en mecanismos rutinizados que permitan traducir demandas potencialmente antagónicas y disruptivas del régimen político en una lógica reformista de otorgamiento de concesiones. Es en ese contexto que el estudio del conflicto social ocupa un lugar central, en tanto que manifestación coyuntural de las contradicciones sociales.

Actualmente, y más específicamente, estamos abordando la cuestión de si la recomposición de la acumulación de capital y del estado desde 2003 ha dado lugar a una nueva hegemonía. En ese marco hemos analizado centralmente la relación entre estado y conflicto obrero (Piva, 2010; 2011) y buscamos aproximarnos a una caracterización más general de la relación entre estado, hegemonía y conflicto social desde 2003.^[4] En este artículo, y como parte de dicho objetivo, intentamos abstraer los principales rasgos de ese conjunto heterogéneo de conflictos constituidos fuera del mundo laboral y articulados por sujetos con identidades no clasistas desde el punto de vista de su relación con la recomposición de la legitimidad del poder político y de las capacidades institucionales de interiorización del conflicto social entre 2003 y 2007. La elección de 2007 como año de cierre del presente artículo presupone una periodización previa en la cual el conflicto entre el gobierno y la burguesía agraria durante la primera mitad de 2008 constituye una ruptura, que es, además, especialmente significativa para

3 Ello presupone condiciones del modo de acumulación de capital que lo hagan posible y que aquí, para enfocarnos en el problema planteado, dejamos momentáneamente de lado.

4 Dado que este artículo presupone resultados de investigación anteriores nos veremos obligados en muchos casos, dados los límites de espacio, a referir a otros artículos en los que se fundamentan algunas de las afirmaciones. En este sentido, pedimos disculpas por las abundantes autorreferencias.

la conflictividad de los “sectores medios”. Las razones para considerar ese conflicto como un acontecimiento exceden los marcos de este artículo y serán analizadas en otros trabajos.

La decisión de clasificar a dicho conjunto por oposición al conflicto obrero – como conflicto no obrero – presenta ventajas y desventajas. Por un lado, esta clasificación surge en el contexto del debate sobre el declive del conflicto obrero y de la emergencia de nuevos movimientos sociales. Desde esa perspectiva, aunque no abordaremos estos problemas en este artículo,^[5] permite caracterizar en términos de evolución cuantitativa y del peso social y político en qué medida el conflicto obrero está siendo desplazado por otros protagonistas. Al mismo tiempo, permite contrastar las distintas dinámicas y el grado de novedad relativa de esos conflictos. Sin embargo, la heterogeneidad interna probablemente exija otros modos de aproximación que den lugar a otras clasificaciones y oposiciones. En gran medida dicho trabajo queda pendiente, aunque más adelante planteamos una clasificación en términos de la capacidad de internalización del conflicto por el estado desde 2003 que permite agrupar algunos de estos conflictos con el conflicto obrero. Más allá de eso, en el caso que analizamos la distinción se justifica ya que, efectivamente, estos conflictos presentan para el período una serie de características comunes, relevantes desde el punto de vista planteado, que los oponen a los conflictos de ocupados y de desocupados.^[6]

Para alcanzar el objetivo planteado en este artículo analizaremos aquellas características relevantes del conflicto social que nos permitan comprender su vínculo con el sistema político. El material empírico que ha servido de base a esta investigación fue la recolección de todas las notas sobre conflictos sociales aparecidas en el Diario La Nación y una revisión de Clarín y Página 12 para aquellos casos que resultaron especialmente significativos en términos de su impacto político y en los medios de prensa. El análisis es prioritariamente cualitativo y el ordenamiento de los datos

5 Para una aproximación a este problema ver (Piva, 2011).

6 La distinción entre conflictos de ocupados y desocupados, que analizamos en otros trabajos (Piva, 2006 y 2011) no obedece a una determinación estructural sino a motivos similares a los esbozados para la oposición entre conflicto obrero y no obrero. En los años '90 los conflictos protagonizados por trabajadores desocupados presentaron particularidades e introdujeron novedades que los distinguen de los conflictos de asalariados ocupados.

atendió a las siguientes dimensiones:

1. La identidad auto atribuida de los sujetos de la protesta (trabajadores, comerciantes, vecinos, etc.)
2. El tipo de demanda formulada
3. Las formas de lucha y organización de los sujetos de las protestas
4. La capacidad de los sujetos de las protestas de universalizar sus demandas
5. La existencia o no de articulación, explícita o implícita, por los propios sujetos de la protesta de objetivos reivindicativos (inmediatos) y políticos (mediatos y orientados al estado).
6. El rol jugado en o frente al conflicto por los actores de la oposición política: participación, dirección, apoyo, oposición, búsqueda de institucionalización, otras.
7. El posicionamiento del gobierno nacional frente al conflicto: negociación, búsqueda de institucionalización, intento de aislamiento/neutralización, represión, respuesta tendiente a la satisfacción de las demandas, otras.

Antes de pasar a su análisis resumiremos brevemente algunos rasgos del conflicto obrero en el período – que hemos desarrollado en otros trabajos (Piva, 2011a y 2011b) - que resultan relevantes para el problema planteado y que necesitaremos retomar en las conclusiones.

Estado y conflicto obrero entre 2003 y 2007

Entre los años 2003 y 2007 se desarrolló un proceso de recomposición de la acción sindical de los trabajadores que, por sus características, se vincularía con el ciclo de resistencias de desocupados y ocupados entre 1996 y 2001. En primer lugar, la mayoría fueron protagonizados por comisiones internas y sindicatos locales. Un segundo hecho, es que en varios de estos conflictos se desarrollaron también prácticas sindicales que pretendieron diferenciarse de -y enfrentarse a- las prácticas sindicales

tradicionales y que se vinculan, en varios aspectos, con las formas asumidas por el conflicto social durante la segunda mitad de los '90 y la crisis de 2001. La apelación al funcionamiento asambleario, la utilización de medidas no tradicionales en combinación con formas tradicionales de lucha, la radicalidad de las medidas, etc. son algunos de dichos aspectos. En tercer lugar, a la radicalidad de las medidas se sumó una tendencia a que los conflictos tuvieran una duración más prolongada.^[7]

Simultáneamente, a partir de 2003, se recuperaron aspectos del viejo vínculo funcional de los sindicatos con el estado centrado en la lucha salarial. Durante los '90, bloqueada la internalización del conflicto obrero por la lucha en torno al salario, la mayor parte de los sindicatos desarrollaron una estrategia neoparticipacionista. La CGT conducida por los "gordos" se revinculó funcionalmente al estado mediante una estrategia consistente en la vehiculización negociada del programa de reformas, basada en su capacidad de disciplinamiento de las bases obreras, a cambio de la conservación de capacidades institucionales, financieras y organizativas. A pesar de ello, no evitó la pérdida de peso político (tanto dentro del PJ como dentro de los gobiernos de Menem), las divisiones internas (la escisión de la CGT-Moyano y el nacimiento de la CTA) y su retroceso en el escenario de los conflictos sociales ante otras organizaciones (en primer lugar, las de desocupados) (Piva, 2009; Bonnet y Piva, 2010). Esta situación se modificó desde 2003. El sistema de sindicatos tendió a unificarse (reunificación de la CGT, dirigida por Moyano, desde julio de 2004) y a encolumnarse detrás de las administraciones kirchnerista (tanto la CGT como, en gran medida, la CTA). Asimismo, los sindicatos recuperaron una parte del peso político que habían perdido (tanto en el PJ como dentro del gobierno de Kirchner) y recuperaron su centralidad como mecanismo institucionalizado de canalización de las luchas sociales (en desmedro de otras organizaciones, incluyendo las piqueteras).^[8] Se reabrieron las negociaciones paritarias y

7 Este crecimiento de la conflictividad de los ocupados y el protagonismo de las instancias sindicales descentralizadas ha sido también desarrollado, entre otros, por Svampa (2008), Campione (2008), Atzeni y Ghigliani (2008) y Scolnik (2009). Sobre la importancia de la acción sindical de las comisiones internas desde 2003 y del vínculo de las prácticas sindicales de las comisiones internas opositoras con las desarrolladas por otros grupos sociales durante la crisis de 2001 ver Scolnik (2009) y Lenguita y Montes Cató (2009).

8 Para una visión sobre el rol que la conservación de las capacidades organizativas sindicales durante la reforma de los '90 tuvo en la reemergencia del conflicto obrero y en el retorno de mecanismos

tuvo un fuerte impulso la negociación de convenios colectivos. El número de convenios colectivos creció todos los años pasando de 348 en 2004 a 1027 en 2007.^[9]

El relanzamiento de la discusión salarial pudo, entre 2003 y 2006, ser contenido dentro de los límites impuestos por el Gobierno, que fijó informalmente pautas anuales de aumento salarial. Sin embargo, en primer lugar, en varios de los conflictos impulsados por comisiones internas opositoras los techos fueron perforados, sólo que por su peso en el conjunto de las negociaciones salariales no supusieron, entre 2003 y 2006, un problema serio para el gobierno. En segundo lugar, ya en 2006 la intención inicial de fijar una pauta del 16% debió ceder a una más realista del 20% fijada en un acuerdo por el 19,5% alcanzado por camioneros tras un conflicto que incluyó bloqueos a empresas y huelgas en distintas ramas sensibles del sector (como transporte de caudales y recolección de residuos). Los restantes acuerdos se alinearon alrededor de la nueva pauta y el aumento anual del salario promedio de los privados registrados se ubicó alrededor del 21%.^[10] Pero, durante el año 2007, la pauta de aumento salarial del 16,5% fue claramente perforada por un aumento anual del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado del 21% en promedio. Hasta qué punto esto supone una ruptura y el retorno a una lógica de puja distributiva inflacionaria es algo que está por verse, pero hay datos que apuntan en esa dirección.^[11]

A pesar de ello, el gobierno, frente al aumento de las luchas sindicales entre 2003 y 2007, logró canalizar el conflicto a través de una lógica de satisfacción gradual de demandas – la mayoría de los conflictos culminaron con resoluciones favorables a las demandas formuladas por los trabajadores - resituar al ministerio de trabajo como ámbito de negociaciones tripartitas y, por lo tanto, recomponer la apariencia de autonomización del estado

de intermediación “neo corporativistas” ver Etchemendy y Collier (2008).

9 Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación.

10 Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación.

11 Aunque excede el límite temporal de este trabajo, la situación se repetiría en 2008 donde un aumento anual del 29% superaría ampliamente la pauta del 19%. Esta tendencia sólo cedería en el año recesivo de 2009 pero se reiniciaría en 2010 y todo hace prever el mismo resultado en 2011. No casualmente el salario real tendió a estancarse desde 2007. La inflación anual tendió a absorber los aumentos salariales y los aumentos de precios fueron convalidados por la política monetaria, todos estos datos indican un retorno de la puja distributiva inflacionaria.

respecto de la sociedad civil. Esto es, logró internalizar el conflicto obrero en una lógica reformista de concesiones y tendió a normalizarlo. En aquellos casos en los que el conflicto amenazó con desbordar los mecanismos institucionales de negociación o desafiar los límites demarcados por el gobierno (casos del hospital Garrahan en 2005 y el Casino en 2006 y 2007), éste fue, por lo general, capaz de aislarlo.^[12] En cuanto a la respuesta represiva el gobierno tendió a apelar a una lógica de represión selectiva – moldeada en el enfrentamiento con los movimientos de desocupados opositores entre 2003 y 2005 - orientada a demarcar los límites tolerables por el gobierno de acciones conducidas por las direcciones sindicales, en particular las opositoras. Por lo general, se trató de conflictos prolongados, que incluyeron medidas de lucha radicales y desarrollados por comisiones internas opositoras (por ejemplo, Casino) o en zonas y áreas políticamente sensibles (por ejemplo, petroleros, pesqueros y docentes en Santa Cruz). Sin embargo, la respuesta predominante fue no represiva.

Esto se desarrolló en el contexto de una normalización simultánea del conflicto piquetero. El gobierno tuvo éxito en su estrategia general hacia el movimiento de desocupados. A menos de dos años de asumido, había incorporado a organizaciones importantes como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y Barrios de Pie a su coalición política y había aislado a los piqueteros duros y deslegitimado sus métodos de protesta. La política denominada “ni palos ni planes” frente al desafío piquetero opositor buscó normalizar y moderar las formas de protesta de los movimientos de desocupados poniendo en el centro de la estrategia una disputa política pública en torno a la legitimidad de cortes, acampes y ocupaciones acompañada por un mínimo de represión selectiva. En el marco de una construcción de consenso sostenida en la satisfacción gradual de demandas, el gobierno negoció y otorgó concesiones a organizaciones que enmarcaron la protesta en límites que progresivamente fue tornando más restrictivos. En esta negociación adquirió relevancia la reorientación de las políticas sociales desde los planes jefes y jefas de hogar hacia el otorgamiento de subsidios para cooperativas de trabajo y de construcción de vivienda a

12 También en este aspecto algunas excepciones significativas, INDEC y el conflicto docente en Santa Cruz, aparecerían en 2007.

cuya ejecución y control se sumaron las organizaciones sociales. Esta tendencia a la normalización del conflicto evidenciada en el caso del conflicto obrero ha coexistido, sin embargo, con una relación más difícil del estado con otros tipos de protestas y demandas. A su análisis dedicaremos el resto del artículo.

Un conjunto heterogéneo de protestas y un rompecabezas político

Como planteamos en el apartado anterior, a pesar de que un rasgo del conflicto social desde 2003 hasta 2007 fue la recuperación de la centralidad política y social del conflicto sindical, los heterogéneos conflictos constituidos fuera del mundo laboral y articulados por sujetos con identidades no clasistas han seguido siendo relevantes en términos de sus efectos políticos.

A pesar de su heterogeneidad, la mayoría de las protestas de “ciudadanos”, “vecinos”, “usuarios”, “consumidores”, “ambientalistas”, y un largo etc. comparten una serie de rasgos comunes.

En primer término, la radicalidad de las formas de protesta. En un rasgo compartido con los obreros ocupados – aunque de modo mucho más generalizado - y en continuidad con la movilización social durante 2001, la apelación a cortes de rutas y calles, la ocupación y el ataque a edificios públicos, las puebladas, el ataque a bienes de empresas privadas fue usual en sus protestas. Esta predisposición de una diversidad de sujetos a desbordar los límites legales de la protesta permaneció parcialmente invisibilizada por la desmovilización de ahorristas, asambleístas y vecinos entre 2003 y 2005 pero se hizo evidente en la medida que durante 2006 y 2007 se produjo un aumento sensible de un conjunto heterogéneo de acciones de protesta.

En segundo lugar, también en continuidad con las luchas sociales de la década del '90 y de principios de siglo, se observa en la enorme mayoría de esas protestas un elemento antipolítico o de rechazo de la política, si bien su significado varía con la variación de identidades, de demandas y de sus articulaciones.

En tercer lugar, en continuidad con este tipo de protestas en los '90, las

demandas tuvieron en la mayoría de los casos un alto grado de universalización y los manifestantes tendieron a aparecer como “los ciudadanos”, “los vecinos” o directamente “la gente”, esto es, a asumir inmediatamente identidades universales. Sin embargo, más que pretender la representación de la totalidad pretendieron ser, o parecieron experimentarse como, la emergencia del propio “pueblo”, de la “ciudadanía”, o de la “gente” como tales y sin representación. Al mismo tiempo, el significado político de sus demandas permaneció abierto y la estabilización temporaria de uno u otro significado dependió de la articulación contingente con otras demandas. Esta curiosa simultaneidad de particularidad/universalismo será analizada enseguida en relación a las protestas contra la inseguridad.

En cuarto lugar, un número significativo de casos presenta indicadores de que sus protagonistas son individuos y grupos sociales pertenecientes a los denominados “sectores medios”.^[13] En trabajos anteriores hemos atribuido a ello la tendencia a confundir su reclamo con el de “la gente”, “los ciudadanos”, etc. Sin embargo, hoy creemos que, si bien existe un vínculo entre ciertas representaciones y prácticas compartidas por estos sectores y la tendencia a confundir su punto de vista con el “sentido común”, la opinión pública, el justo medio como verdad, hay ciertas características de ese conjunto heterogéneo de protestas que, vinculadas con la paradoja particularismo/universalidad, permiten ese tipo de identificaciones. En todo caso, hipotetizaremos en lo que sigue, se trata de identificaciones afines con las representaciones y prácticas de los “sectores medios”, pero que los exceden y que tienen un nexo mucho más cercano con una crisis de representación incompletamente resuelta.

Como señalábamos más arriba, los conflictos constituidos fuera del mundo laboral fueron heterogéneos y abarcaron una gran variedad de protestas y demandas. Muchas de ellas alcanzaron una importante repercusión e impacto político a nivel nacional y/o provincial como las protestas que siguieron a la inundación en Santa Fe en 2003 y que se extendieron hasta

13 “Sectores medios” no es una categoría de clase sino sociocultural, incluye lo que tradicionalmente el marxismo a denominado pequeña burguesía, pequeño propietarios no liberados del trabajo, y dos conjuntos de asalariados: aquellos correspondientes a posiciones que Erik Olin Wrigth ha denominado como “situaciones contradictorias entre la clase obrera y la burguesía” más asalariados puros asimilados por sus prácticas y representaciones a la pequeña burguesía.

el año 2004. Otras, sin dar lugar a casos que constituyeran situaciones políticas en sí mismos, pusieron de manifiesto en su reiteración y amplitud de temas la tendencia a la movilización de diversos sectores de la población, particularmente en 2006 y 2007. Ejemplo de ellas son las reiteradas protestas de “vecinos” por cortes de suministro eléctrico, por inundaciones provocadas por problemas de desagüe, contra la construcción de edificios torre en barrios residenciales, contra los efectos contaminantes de plantas industriales, depósitos de basura o desechos industriales o la pretensión de su instalación, exigiendo la instalación de semáforos o pasos a nivel, etc, fundamentalmente en capital y el conurbano pero también en el interior del país, sobre todo en grandes centros urbanos. La usual apelación al corte de ruta, calle o de vías de trenes en la mayoría de los casos muestra la generalización de la apelación a la acción directa radical. Pero también resultan significativas medidas más duras como la ocupación e incluso el ataque de edificios públicos. En este sentido, la disminución de la actividad de los principales protagonistas de la crisis de 2001, ahorristas que tendieron a recuperar gran parte de sus ahorros con pérdidas menores a las inicialmente esperadas, asambleas barriales que se redujeron en número y reorientaron su acción al trabajo barrial, y las organizaciones de desocupados a las que nos refiriéramos antes, puede ocultar este rasgo de continuidad después de la crisis de 2001.^[14]

A pesar de su heterogeneidad es posible identificar movimientos de protesta significativos, algunos por su peso cuantitativo y en todos los casos por su peso político. Si bien han sido excluidos de la selección algunos importantes, como las tomas de colegios secundarios por problemas de infraestructura en 2005, 2006 y 2007 y que alcanzaron importantes niveles de generalización, creemos que los propuestos ponen de manifiesto aspectos sustanciales de la relación entre conflicto y sistema político en el período.

Un primer movimiento de acciones colectivas que tendió a crecer y a hacerse notorio durante 2006 y 2007 es el de la demanda de viviendas. Simultáneamente con el aumento del empleo, el repliegue del conflicto de

14 En otro lugar hemos analizado como el gobierno de Duhalde y los dos primeros años del gobierno de Kirchner recompusieron el poder político retomando las demandas de - u otorgando concesiones a - las fracciones movilizadas durante 2001/2002. (Piva, 2007; Belkin y Piva; 2009)

desocupados y con la reorientación de la política social hacia planes que otorgaron un espacio importante a las cooperativas de autoconstrucción, muchas organizaciones de desocupados tendieron a adquirir un carácter más territorial y a tomar este tema tanto a través de la solicitud de subsidios para la autoconstrucción como también de la demanda de tierras. Efectivamente, organizaciones con orígenes en el movimiento de desocupados como el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) han tenido en el período participación en protestas de este tipo, por ejemplo, en la capital en la zona de influencia de villa 20 y villa 15, pero también el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras le han, en muchos casos, otorgado un mayor espacio del que ya tuviera en los '90. Organizaciones como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) tienen su origen de hecho en las ocupaciones de tierras con antecedentes en el final de la dictadura militar. Sin embargo, más allá del papel de estas organizaciones, el movimiento por la vivienda tuvo amplio desarrollo en el conurbano y en las diversas villas y asentamientos de la capital con el aumento de las ocupaciones de tierras pero también con la apelación a cortes de rutas, calles y vías de trenes como medios de reclamo. La relación de los diferentes niveles de gobierno con esta demanda es ambigua. Las ocupaciones y cesiones de tierras y los subsidios de construcción de viviendas han históricamente constituido un aspecto importante en la articulación de lo que Auyero ha denominado la "zona gris" y de la construcción política territorial del peronismo (Auyero, 2007). Al mismo tiempo, la reorientación de la política social del gobierno tendió a fortalecer este tipo de demandas y a la organización para la conquista de terrenos y acceso a subsidios. En este sentido, el movimiento por la vivienda empalma con la política de satisfacción gradual de demandas como fundamento de la reconstrucción del consenso político del kirchnerismo. Sin embargo, se ha constituido también en un terreno de disputa con organizaciones que muestran autonomía respecto del gobierno y de difusión de este tipo de protestas, en muchos casos con un alto grado de espontaneidad, que tienden a desbordar la capacidad de respuesta del gobierno y, por lo tanto, de internalización del conflicto. Hemos señalado en otro lugar que la respuesta represiva selectiva del gobierno frente al

movimiento de desocupados y ante el conflicto de obreros ocupados ponía de manifiesto la existencia de otra dimensión del conflicto, además de aquella ligada a la formulación y conquista de reivindicaciones de cualquier tipo, que denominábamos conflicto en torno al control del conflicto (Piva, 2011c). También este fenómeno tiene un rol importante en la decisión de represión y desalojo ante protestas y ocupaciones en reclamo de viviendas, en las disputas por el otorgamiento, control y ejecución de los subsidios, etc. El gobierno persigue por este medio delimitar la extensión, radicalidad y alcance de las demandas y protestas. La tendencia a desbordar dichos límites y a su redefinición se evidencia en las disputas entre y con organizaciones pero también en la tendencia a los conflictos entre habitantes de distintas villas y asentamientos por el acceso a viviendas. La amenaza latente es la generalización espacial y la sincronización temporal de las protestas. Otro hecho que complejiza el fenómeno es que durante 2006 y 2007 se produjeron varios hechos de protesta de “vecinos” contra la ocupación o cesión de tierras a habitantes de villas y asentamientos. Enfrentamientos entre “vecinos” que querían desalojar a ocupantes y la policía provincial en Ciudad Evita, La Matanza, cortes de calles en Soldati, Capital, para impedir la construcción de viviendas para habitantes de Villa Cartón, el incendio de una fábrica en Parque Patricios, Capital, por “vecinos” que se oponían a la construcción de viviendas en dicho predio, son sólo algunos casos. Un segundo conjunto de acciones de protesta que adquirieron relevancia entre 2005 y 2007 fueron las rebeliones de usuarios de trenes. En mayo de 2005 usuarios enfurecidos quemaban vagones en la estación Castelar. En noviembre, volvían a atacar y quemar formaciones de trenes y se producían saqueos en los alrededores de la estación Haedo. Durante 2007 usuarios de trenes la emprendían contra trenes en la terminal de Constitución y hechos similares ocurrían en Temperley, también en el ramal Roca, en el mes de Junio. La actitud del gobierno antes estos hechos fue inicialmente ambigua. Al mismo tiempo que se criticaba a las empresas que gestionaban el servicio por el déficit de mantenimiento se acusaba a grupos de izquierda de estar detrás de los hechos. Sin embargo, hacia 2007 predominó en el discurso oficial la responsabilización de las empresas y durante ese año se decidió, en función de los incidentes de mayo, la reestatización del ramal

Roca. Esta estatización, al igual que la posterior de Aerolíneas Argentinas, tiene características que la diferencian de las simples estatizaciones rescate del Correo Argentino y de Aguas Argentinas. La diferencia radica justamente en que se constituyen como respuestas políticas a situaciones de conflicto y que se encuadran en la lógica de construcción de consenso a través de satisfacción gradual de demandas. Manifiestan, además, en el caso particular de las privatizaciones, las tensiones generadas por el mantenimiento de lo esencial del proceso privatizador – las estatizaciones realizadas no suponen una dinámica de reversión del proceso de reforma del estado de los '90 – y una lógica de construcción de consenso que, debiendo canalizar las impugnaciones a las consecuencias del proceso privatizador, cuestiona y pone en crisis la relación entre estado y empresas privatizadas. Por otra parte, en este tipo de protestas, al igual que en las generadas por demanda de viviendas, la intervención del estado resulta complejizada porque en varios casos se producen enfrentamientos entre consumidores y trabajadores. Estos enfrentamientos se desarrollan en dos contextos diferentes, un primer contexto en el cual los trabajadores ferroviarios son objeto de ataque en tanto cara visible de la empresa y un segundo contexto en el que los ataques se dirigen a trabajadores que realizan medidas de fuerza que interrumpen o demoran el servicio. Es posible observar incluso medidas cruzadas, ataque de usuarios motivados en el rechazo a medidas de fuerza de trabajadores y medidas de fuerza de los asalariados motivados en reclamos de seguridad frente al ataque de los usuarios. Este hecho resulta significativo porque manifiesta un carácter del conflicto social que ha adquirido importancia desde los '90: los conflictos de asalariados en tanto consumidores con asalariados organizados como colectivo sindical. La extensión de este tipo de conflictos remite a algo que hemos desarrollado en otro lugar, el proceso de desagregación de clase y de desproletarización subjetiva. El colectivo de trabajadores se enfrenta en su acción a los demás asalariados como un grupo de interés particular, no es posible apelar a la solidaridad de clase como a un sustrato constituido (Piva, 2011).

Un tercer conjunto, las protestas ambientalistas, tuvo una creciente presencia en el conflicto social y fue capaz de instalar nuevos temas en

la agenda política. Si bien la problemática ambiental se ha constituido en causa de protestas de las más diversas (demandas por el retiro o contra la instalación de basurales, protestas contra empresas contaminantes, etc.) hay dos movimientos que han tenido un papel significativo: el movimiento contra la minería a cielo abierto y la asamblea ambiental de Gualeguaychú contra la instalación de las pasteras en Uruguay. Si bien ambos movimientos tienen particularidades que los diferencian también comparten algunas características que resultan relevantes para nuestro problema. En primer lugar, la apelación a formas de organización y al repertorio de protestas que caracterizaron las luchas del año 2001: la forma asamblearia y la utilización de cortes de rutas y caminos. En segundo lugar, el predominio de la acción directa y de la asamblea como forma de organización y mecanismo de toma de decisiones se encuentran vinculados a otro rasgo de continuidad con 2001: la desconfianza en los mecanismos de representación. En tercer lugar, esta desconfianza en los mecanismos de representación ha conducido a las asambleas a la búsqueda de autonomía respecto de los partidos y del estado, que en el caso de la asamblea de Gualeguaychú adoptó en determinados momentos y discursos de los manifestantes un marcado tono antipolítico. En cuarto lugar, las demandas de los manifestantes plantean límites a la capacidad de canalización por parte del estado y de interiorización en el sistema político. Por un lado, fundamentalmente en el caso de la minería a cielo abierto, pero también hasta cierto punto en el caso de la instalación de las pasteras uruguayas, la posición de los manifestantes es el rechazo a una actividad considerada contaminante, esto es, el planteamiento del problema deja poco espacio para soluciones de compromiso. Por otro lado, las protestas apuntan a actividades que han sido de las más dinámicas en cuanto a expansión del producto y atracción de inversión extranjera directa (IED) y que, más allá de las discusiones en torno a la caracterización del modo de acumulación, se han constituido en relevantes tanto para la atracción de IED como para el desempeño exportador en regímenes de acumulación caracterizados por la orientación exportadora de mercancías de bajo valor agregado en términos internacionales. Frente a esto, la estrategia del gobierno en el caso de Gualeguaychú, ha combinado la renuncia a la represión para evitar los

cortes de los pasos internacionales con la búsqueda del aislamiento de la protesta mediante el desgaste. El objetivo de dicha estrategia fue tratar de subordinar el reclamo a la dinámica de la relación bilateral entre Argentina y Uruguay y, particularmente, al acatamiento de los fallos internacionales de la Corte de la Haya, lo que supone la aceptación como un hecho consumado de la instalación de las empresas. En el caso de las mineras, la relación entre el gobierno y el movimiento ambientalista ha sido más conflictiva. En el período analizado el gobierno se ha opuesto a las demandas de las asambleas y ha favorecido con sus políticas la inversión en el sector. Sin embargo, después de la victoria de la asamblea de Esquel que impidió la minería a cielo abierto en la región, se han diseñado políticas tendientes a que las comunidades reciban beneficios de la inversión minera como medio de promover su aceptación y aislar a los ambientalistas (ver Alvarez, Camposto 2010). En el período considerado el resultado ha sido ambiguo. La inversión minera aumentó de manera sustantiva y la producción ha tenido importantes avances en Catamarca y San Juan a pesar de la oposición de las asambleas, pero, al mismo tiempo, el movimiento de protesta creció en extensión y ganó legitimidad. Además, al antecedente de Esquel se sumó la victoria de los ambientalistas en Famatina y Chilecito en la provincia de La Rioja, después de dos meses de bloqueo ininterrumpido de los caminos a los obradores del proyecto minero. La oposición, entre 2003 y 2007, optó mayoritariamente por un alineamiento silencioso con el gobierno en las posiciones fundamentales, es el caso del PRO, el peronismo disidente y la UCR – articulado con críticas al manejo de la relación con Uruguay. La excepción fue la centroizquierda no oficialista, como sectores del ARI, otros sectores originalmente alineados con el gobierno que se alejarían por diversos conflictos, entre ellos los vinculados con la minería a cielo abierto, y el socialismo. Este grupo de legisladores, de bajo peso numérico en el parlamento, tendió a transformarse en varias situaciones en un aliado institucional de los asambleístas aunque su capacidad para traducir institucionalmente el conflicto fue más bien limitada.

Pero el movimiento de protestas no vinculado al mundo laboral más significativo del período en términos de su impacto político fue el movimiento de protestas contra la inseguridad. En 2003 se producían

puebladas motivadas en casos de inseguridad en Arequito (Provincia de Santa Fe) y en Arrecifes (Provincia de Buenos Aires). Esto daba lugar a marchas, muchas de ellas con incidentes, en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. En este clima el 31 de octubre a la noche se organizaba un cacerolazo contra la inseguridad en distintas ciudades pero que tenía importante adhesión en el conurbano, incluyendo un cacerolazo masivo frente a la quinta de olivos, y en algunos barrios de la capital como caballito o recoleta. Es en este contexto que emergió la figura de Juan Carlos Blumberg a fines de marzo de 2004. El caso de su hijo secuestrado y asesinado causó conmoción y sus convocatorias tuvieron un acompañamiento masivo. Blumberg llamó a firmar un petitorio que proponía una serie de medidas orientadas a endurecer penas y condiciones de excarcelación y a aumentar los controles sobre teléfonos celulares, entre otras. Este petitorio alcanzó el objetivo explícito de 2 millones de firmas en pocas semanas y llegaría a superar las 3 millones seiscientos mil firmas. Una primer convocatoria al congreso nacional el 1° de abril de 2004 reuniría entre 120 000 y 150 000 personas según los diarios y una segunda el 22 frente a tribunales más de 70 000 según las mismas fuentes. Se sucederían, además, múltiples movilizaciones convocadas en diversas localidades de la Provincia de Buenos Aires y en el interior del país con asistencias de entre 4000 y 10 000 personas según los mismos tres diarios. El gobierno inicialmente no se enfrentaría a Blumberg. Si bien el discurso de Blumberg - orientado al endurecimiento de las penas, la imputabilidad de los menores, el otorgamiento de mayores atribuciones a las fuerzas policiales, etc. - resultaba contradictorio con un discurso oficial centrado en el respeto de los derechos humanos y contrario a la solución represiva de problemas sociales, el énfasis de Blumberg en “despolitizar” su reclamo permitió al gobierno contener y acompañar su demanda y esterilizar cualquier intento de reposicionamiento opositor alertando sobre “el uso político del dolor”. Al mismo tiempo, el objeto político de las protestas era el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá. La estrella de Blumberg comenzaría a decaer a mediados de 2006, cuando dirigiera su reclamo a la plaza de mayo y se enfrentara con el gobierno, y sobre todo en 2007, cuando hiciera públicos sus deseos de postularse como gobernador de la Provincia de

Buenos Aires y se acercara a referentes de la centroderecha como Sobisch, Macri y López Murphy. El episodio vinculado a su falso título de ingeniero es, en ese recorrido, meramente anecdótico. Sin embargo, las protestas por inseguridad no cesarían, aunque perderían un centro articulador. Durante 2005, 2006 y 2007 se multiplicarían localmente las marchas, cacerolazos, cortes de calles, rutas y vías de trenes, ataques a comisarías, incendios de casas de sospechosos y otras manifestaciones por dicho tema.

El análisis sobre el auge y caída de Blumberg nos permite entrever algunas características relevantes del movimiento de protestas contra la inseguridad. Además, justamente por su contraste con otros movimientos de protesta, nos permitirán comprender mejor algunos rasgos del conjunto heterogéneo de protestas que nos ocupan en este apartado y de su relación con el sistema político.

Como señalábamos recién, la pérdida de popularidad de Blumberg se origina en sus decisiones simultáneas de oponerse al gobierno y acercarse a figuras de la oposición de centroderecha. Pero la razón de esta relación no se encuentra en la pérdida de apoyo de sectores afines al gobierno. La pérdida de apoyo fue generalizada y, además, coincide con un período de alejamiento gradual pero progresivo de los “sectores medios” del gobierno. Nuestra hipótesis es que la razón se encuentra en el rasgo antipolítico presente en las protestas contra la inseguridad. La principal característica de ese rasgo es un rechazo a la instrumentalización de la problemática, su transformación en un simple medio para la acumulación de poder político. La despolitización del discurso, o su contrario: la acusación de politización, supone una definición de la política como búsqueda de la acumulación de poder por un sector o capa social en interés propio, o de grupos minoritarios, y opuesto al auténtico interés general. Blumberg se tornó sospechoso de instrumentalizar la problemática de la seguridad para “hacer carrera política” y el gobierno, a través de declaraciones de sus funcionarios, lo acusó de ello. Sectores afines al gobierno, como la FTV, e incluso no oficialistas, como el líder del Servicio Paz y Justicia y premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, llamaron a hacer contramarchas denunciando el contenido derechista o autoritario de la movilización a Plaza de Mayo, donde, además, fue evidente la participación de referentes

políticos de ese espectro ideológico.

El rechazo a la instrumentalización como núcleo de este rasgo antipolítico de rechazo de la política alcanza un grado máximo en las protestas contra la inseguridad en la medida que la mayoría de ellas tienen como fundamento procesos de identificación colectiva sostenidos en el dolor, la tragedia o la pérdida personales. El rasgo antipolítico adopta en ese caso el carácter dramático de un rechazo a la instrumentalización del sufrimiento. Y este aspecto se encuentra a su vez vinculado con otro rasgo de las protestas contra la inseguridad: las demandas aparecen enunciadas desde un lugar inmediatamente universal, que no requiere mediación para universalizarse. No sólo por la identidad de los sujetos, “vecinos” o “la gente”, sino también por aquel fundamento inmediatamente universal de la identificación colectiva: el sufrimiento humano. En el caso de la inseguridad, este dramatismo de la identificación fundada en el dolor personal ha quedado como inmediatamente ligado a una serie de oposiciones - garantismo/mano dura, derechos humanos de los delincuentes/derechos humanos de las víctimas, etc. – que le han cuasi fijado un significado afín a las posiciones ideológicas de la derecha local. Sin embargo, no puede reducirse el significado de las protestas contra la inseguridad y de su rasgo antipolítico a este único encadenamiento. El rechazo a la instrumentalización del sufrimiento contiene también una dimensión disruptiva y radical que empalma con la crítica a la política como medio de acumulación de poder de una capa social y al servicio de grupos poderosos presente también en otros movimientos de protesta, como las asambleas ambientalistas, y que se vincula con la crisis de representación manifestada en asambleas y movilizaciones desde 2001.

En el movimiento de Cromagnon ciertas particularidades profundizan esta ambigüedad. El movimiento de familiares y amigos de los jóvenes muertos en el local República de Cromagnon el 30 de diciembre de 2004 comparte varios tópicos discursivos con las protestas contra la inseguridad, además del reclamo de penas duras para todos los responsables, y particularmente el rasgo antipolítico recién señalado. Pero tiene la particularidad de que la búsqueda de justicia para las víctimas de este delito los enfrenta a una red de responsabilidades que vinculan al Estado, como controlador

del cumplimiento de las reglamentaciones sobre seguridad en negocios de estas características, con sectores empresarios. Este hecho, junto con especificidades ligadas a la composición del movimiento, ha permitido evidenciar en la acción y en el discurso de familiares y amigos de las víctimas, como casi ningún otro, la ambigüedad antes señalada del rasgo antipolítico, entre un significado afín a tradiciones autoritarias de cuestionamiento de la política y un significado disruptivo y radical que cuestiona los límites de la democracia representativa y del sistema de partidos. También puso de manifiesto las dificultades del sistema político para lidiar con este tipo de movimientos. La oposición dio cauce institucional al reclamo de salida del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Anibal Ibarra al removerlo mediante juicio político pero sin que ello se tradujera en una recomposición de la confianza del movimiento en el sistema político o en alguna de sus fuerzas como la conquistada por el gobierno nacional en el caso de las principales organizaciones de DDHH.

Es en este nexo entre el rasgo antipolítico de las protestas y la crisis de representación que cobra sentido la pretensión de universalidad inmediata de los sujetos y sus demandas, el hecho, que mencionáramos al inicio de este apartado, de que experimenten su acción como la emergencia del “pueblo” sin representación. Sin embargo, dicha inmediatez plantea un límite al alcance de las demandas enunciadas por las diferentes protestas. En tanto no mediados, los problemas planteados aparecen aislados unos de otros y sin referencia a - desvinculados del - orden social como totalidad, es decir, el precio de la despolitización de las protestas es su particularización, la contracara de su pretendida universalidad inmediata. Es este efecto “particularizante” de la pretensión de universalidad inmediata lo que determina, como hemos planteado antes, el significado político abierto de muchas de las demandas de estas protestas cuya fijación depende de su articulación contingente en contextos determinados de luchas sociales. Esto resulta profundizado en muchos casos por el carácter efímero de las identidades constituidas en las luchas y, en su mayoría, por la ausencia o debilidad de organizaciones de carácter permanente, que permitan estabilizar – y disputar – determinados vínculos con otros sujetos y demandas y con el estado. En el caso de la seguridad, sin

embargo, las demandas han resultado más establemente ligadas al tipo de encadenamiento afín a las tradiciones ideológicas de la derecha, aunque está siempre latente otro tipo de articulaciones, que les otorgue otros significados posibles, como los asumidos por las demandas del movimiento de cromagnon. Esta situación ha determinado que el Pro, el peronismo disidente, Sobisch, López Murphy, el PAUFE del ex comisario Pati hayan sido más exitosos a la hora de incorporar la problemática de la inseguridad en sus programas y de vincular su actividad parlamentaria con el movimiento de protestas contra la inseguridad. Sin embargo, esta articulación fue más eficaz durante el apogeo de Juan Carlos Blumberg, en la medida que constituía un centro articulador de protestas inorgánicas y que tendían, fuera del cauce de dichas movilizaciones masivas, a adoptar formas radicales.

De lo expuesto, surge que el gobierno tuvo mayores dificultades con las protestas gestadas fuera del ámbito laboral pero, al mismo tiempo, mayor capacidad de canalizar la protesta en los casos del movimiento por la vivienda y de las protestas de usuarios de trenes que en los casos del movimiento ambientalista, el movimiento de cromagnon y de las protestas contra la inseguridad. En ello han tenido que ver diversas dimensiones de los diferentes conflictos – el papel de la minería en el actual modo de acumulación, por ejemplo - pero el dominante rasgo antipolítico de las últimas se encuentra también vinculado a esas dificultades. La disposición a la negociación – cuando existe algún tipo de organización - y la confianza en funcionarios y dirigentes políticos es sin duda menor en estos tres casos.

De lo expuesto también surge que todas estas protestas, y en particular la tendencia a la apelación a la acción directa radical, indican una resolución incompleta de la crisis de representación abierta, particularmente, a partir de la crisis de 2001. En este sentido, resulta relevante la observación de que durante 2006 y 2007 parece desarrollarse un progresivo alejamiento de los “sectores medios urbanos” del gobierno, en particular en la Capital Federal y en el conurbano bonaerense. En trabajos anteriores hemos expuesto la existencia de una cierta recomposición del consenso político en esos sectores entre 2003 y 2005, a partir de una estrategia

del gobierno de Kirchner tendiente a recuperar parte de sus demandas (Piva, 2007; Belkin y Piva, 2009). Esto coincide con cierta desmovilización social de “ahorristas”, asambleas, y también de las protestas de “vecinos”, “consumidores”, “ciudadanos”, etc. Entre 2006 y 2007, sin embargo, hay un nuevo incremento de las protestas sociales de esos sujetos. Si bien, como hemos señalado, no sólo los “sectores medios” son partícipes de protestas con las características enunciadas, es visible un aumento de su movilización en esos dos años. Específicamente, podemos observar un vínculo entre este proceso de movilización y cierta reaparición de tópicos de protesta que señalan un hiato entre “sectores medios” y el gobierno que refieren de modo más general a una crisis de confianza en el sistema político.

En primer término, durante 2006 se desarrolla un proceso de movilización en la provincia de Misiones contra el intento del entonces Gobernador Rovira – alineado con el gobierno nacional - de reformar la constitución para permitir la reelección indefinida. Este proceso concluirá en la conformación del “Frente Unidos por la Dignidad” encabezado por el obispo Piña que triunfará en las elecciones constituyentes impidiendo el intento reeleccionista. Este proceso tuvo un importante impacto en la opinión pública a nivel nacional y determinó que Nestor Kirchner interviniera personalmente para disuadir al gobernador jujeño Fellner y al bonaerense Solá de renunciar a sendos intentos reeleccionistas. En el caso de la provincia de Buenos Aires el conjunto de la oposición, inspirada en el caso de Misiones, estaba cerca de un acuerdo para hacer un frente antireeleccionista y amenazaba con convocar a protestas. También en 2006 impactaba en la opinión pública, y en particular en los “sectores medios” de la CABA, la utilización de patotas vinculadas a dirigentes del PJ porteño para desalojar a trabajadores del Hospital Francés que ocupaban el establecimiento en demanda de pago de salarios y defensa de los puestos de trabajo. Durante 2007, el hasta entonces Kirchnerista y candidato a gobernador de Córdoba Luis Juez rompía con el Kirchnerismo denunciando fraude del PJ cordobés en su contra con complicidad del gobierno nacional. Desde allí hasta fin de año convocaría a multitudinarias movilizaciones de protesta exigiendo el recuento voto por voto y la realización de nuevas elecciones. Todas estas movilizaciones ciudadanas

marcan una progresiva ruptura de amplios sectores de la población, en particular de los “sectores medios urbanos” de las grandes ciudades, con el Kirchnerismo. Parte de este fenómeno son el conflicto originado en la intervención del INDEC y el conflicto de los docentes de Santa Cruz que se desarrollarían en el año 2007. El conflicto del INDEC tuvo un fuerte impacto político que determinó un mayor distanciamiento de los “sectores medios” del gobierno. El mismo año, se producía un extenso conflicto docente en Santa Cruz, la provincia del presidente Kirchner. El conflicto comenzaba la misma semana del inicio de clases con paros que llegarían a ser por tiempo indeterminado. Más de 60 días perdidos de clase, cortes de rutas y calles, movilizaciones multitudinarias, la instalación de una carpa docente frente a la gobernación, estado de asamblea permanente dan un indicio de la magnitud del conflicto. El gobierno respondió con la movilización de la gendarmería que ocupó los establecimientos para evitar que fueran tomados por los docentes y que llegó a enfrentarse con los trabajadores en algunas oportunidades. Un hecho significativo de este conflicto, fue la amplia “movilización ciudadana” que acompañó, sobre todo en Río Gallegos – la capital de la provincia -, al reclamo docente. Se produjo una participación considerable de los “sectores medios” de la ciudad no sólo en las movilizaciones convocadas por el gremio sino a través de cacerolazos y de la ocupación de espacios públicos. En este contexto, la oposición política jugó un rol muy importante. La oposición provincial, especialmente la UCR que estaba al frente de la intendencia de Río Gallegos, apoyó abiertamente la protesta. Pero también la oposición nacional apoyó las medidas. Especialmente dirigentes de la UCR nacional y de la Coalición Cívica no sólo se manifestaron dentro y fuera del parlamento a favor de la protesta sino que viajaron a la provincia para dar su apoyo. En el marco de la situación política creada por el conflicto, que obligó a la renuncia del gobernador Sancho y a la asunción de Daniel Peralta, toda la oposición política intentó articular un frente anti kirchnerista en la provincia, hecho que finalmente no ocurrió. Pero lo notable es el cambio en la actitud de la oposición frente a la protesta que se produjo en el transcurso de este conflicto. La dinámica del conflicto tendió a transformarlo en un conflicto político, sustentado en la apelación masiva a la acción directa radical. El

marcado tono antiinstitucional de las movilizaciones y la impugnación creciente del estilo político del gobierno provincial dieron a la participación de la oposición en el conflicto un carácter novedoso en esos cuatro años. La oposición legitimó o directamente participó de acciones directas y salió del escenario parlamentario e institucional para ingresar en la lucha callejera. Aunque no podemos extendernos demasiado sobre el punto aquí y excede nuestro límite temporal, la dinámica y extensión del conflicto tiene rasgos que anticipan algunas características del conflicto con la burguesía agraria en 2008, aunque el contexto y su significado variarían considerablemente. El cambio de actitud de la oposición frente a la acción directa radical también manifiesta la mayor tendencia a apelar a este tipo de medidas de los “sectores medios” en un contexto en que se evidenciaban los límites de la recomposición del consenso político y del cierre de la crisis de representación. Esto se manifestaría en las elecciones nacionales de 2007 en las que el kirchnerismo se impondría a pesar de ser derrotado en varios de los principales centros urbanos.

Conclusiones

El análisis, en anteriores trabajos, de algunas de las principales características del conflicto obrero entre 2003 y 2007 y de las estrategias desplegadas frente a él por el gobierno y la oposición ha puesto de manifiesto la recomposición de las capacidades institucionales del estado y del consenso sobre la base de una estrategia de satisfacción gradual de demandas. El estudio del conflicto constituido fuera del mundo laboral por sujetos con identidades no clasistas nos permitió observar sus límites, en particular la resolución incompleta de la crisis de representación abierta en 2001.

Desde esta perspectiva hay dos conclusiones que resultan relevantes. La primera es la persistencia en la apelación a la acción directa radical. Este es un hecho que habíamos registrado en el caso de los obreros ocupados. A lo largo del artículo hemos observado que también siguió siendo generalizado el uso de medidas de fuerza radicales en los conflictos constituidos fuera del mundo laboral, y que a una caída de la frecuencia de este tipo de

protestas hasta 2005, siguió un aumento de su número en 2006 y 2007. Sin embargo, si a la capacidad del gobierno de internalizar y normalizar el conflicto sindical sumamos la integración y normalización del conflicto de los movimientos sociales el resultado es que las protestas que plantean límites a la capacidad del estado para canalizar el conflicto son aquellas cuyos sujetos tienen menores niveles de organización y articulación. Al mismo tiempo, la activación inorgánica de estos grupos sociales en un contexto de relativa internalización del conflicto popular tiene menos potencialidades de desatar procesos de movilización de consecuencias disruptivas como ocurrió durante el gobierno de la Alianza o a nivel local en los estallidos, cortes y puebladas del interior del país durante los años '90. El bajo nivel de organización y articulación de esos grupos sociales también les plantea límites a la hora de incidir en la construcción de la agenda política. Dependen de circunstancias exteriores que creen condiciones para la movilización masiva más o menos espontánea, como el inicio de un ciclo de movilización por grupos más organizados (caso de los docentes de Santa Cruz en 2007) o fenómenos contingentes que constituyan algún centro articulador (como el caso Blumberg). Es decir, la persistencia en la apelación a la acción directa marca los límites en la reconstrucción del consenso pero también, dado su carácter inorgánico, la escasa capacidad de ese conflicto para traducirse en un desafío político relevante, al menos por sí mismo.

La segunda conclusión relevante que señala los límites del consenso político y la resolución incompleta de la crisis de representación es la existencia de un difundido rasgo antipolítico en las protestas sociales “ciudadanas”, “vecinales”, “ambientalistas”, etc. Este rasgo que hemos vinculado con la “universalidad inmediata” de esas protestas, señala límites a la articulación política por el “particularismo” que corresponde a su inmediatez, pero también señala como ningún otro las dificultades del sistema de partidos para internalizar estos conflictos. Constituye un fundamento difuso e inorgánico pero permanente para el desarrollo de procesos de movilización que pongan en cuestión el marco representativo institucional.

En este sentido, la tendencia al alejamiento del gobierno de los “sectores medios” desde 2006 y 2007 cobró como una de sus formas la apelación

a la acción directa radical de la que antes hablábamos. El hecho de que la misma oposición política parlamentaria haya apelado a este tipo de acciones en el conflicto de Santa Cruz de 2007 es el dato que más dudas crea respecto de la solidez del consenso construido y, por lo tanto, de la recomposición del poder político estatal. En otros trabajos (Piva 2011b, Bonnet y Piva 2010) hemos planteado que las tendencias a la reversión de los atributos que caracterizaron a la forma de estado durante el período de la convertibilidad sin que se atisbaran contornos de una nueva forma, nos hacían pensar en un consenso construido sobre la base de la satisfacción gradual de demandas, en un contexto de expansión económica, pero no en una nueva hegemonía. La apelación a la acción directa, antiinstitucional, por la misma oposición parlamentaria nos plantea como pregunta si ciertos conflictos no ponen de manifiesto la existencia de una disputa en torno a los propios mecanismos institucionales de canalización del conflicto social que constituyen el corazón de una hegemonía.

Bibliografía

- Antón, G. et al (2010): "Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en Argentina" en *OSAL*, Año XI, Nº 28, Noviembre de 2010, Buenos Aires, CLACSO.
- Atzeni, Mauricio y Ghigliani, Pablo (2008): "Nature and limits of trade unions' mobilizations in contemporary Argentina", *Labour Again Publications*, International Institute of Social History, Amsterdam. Disponible en <http://www.iisg.nl/labouragain/documents/atzeni-ghigliani.pdf>
- Auyero, Javier (2007): *La zona gris, violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Siglo XXI editores.
- Belkin, Alejandro, Piva, Adrián (2009): "Elecciones del 28 de junio de 2009: el giro a la derecha en el ciclo político abierto por las jornadas de diciembre de 2001", *Revista Herramienta* nº 42, Octubre de 2009, Buenos Aires, Ediciones Herramienta.
- Bonnet, Alberto y Piva, Adrián (2010): "Estado y cambios en el estado argentino contemporáneo" *Revista de Estudios Marítimos y Sociales* Año 3, Nº 3, Noviembre, Grupo de estudios sociales marítimos (GESMAR) de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Campione, Daniel (2008): "Reaparición obrera" en Argentina a partir de 2004" en López Maya, Margarita; Iñigo Carrera, Nicolás; Calveiro, Pilar, *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*, Buenos Aires, FLACSO.
- Cortés, Martín (2009): *Luchas populares y lógica estatal: entre la autonomía y la institucionalización. Estado y conflicto social en la Argentina contemporánea (2003 – 2007)* Tesis de Maestría, Maestría en ciencias sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
- Etchemendy, Sebastián y Ruth Collier (2008): "Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)", en *POSTData*, Nº 13, agosto.
- Gramsci, Antonio (1998): *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión
- Laura Alvarez y Claudia Composto (2010): "Minería a gran escala. Estado y resistencias sociales" Ponencia presentada a las VI Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata "Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales", La Plata, 9 y 10 de diciembre de 2010.

- Paula Lenguita y Juan Montes Cató (comps.) (2009): Resistencias laborales. Experiencias de repolitización del trabajo en Argentina, Buenos Aires, El aleph.
- Piva, Adrián (2006): “El desacople entre los ciclos del conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (1989 – 2001)”, en *Revista Estudios del Trabajo*, ASET, Buenos Aires, primer semestre.
- Piva, Adrián (2007): “Modo de acumulación y hegemonía en Argentina: continuidades y rupturas después de la crisis de 2001”, en *Anuario EDI*, nº 3, Asociación de Economistas de Izquierda, Buenos Aires, abril, pp. 51-67.
- Piva, Adrián (2009): “Vecinos, Piqueteros y Sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001”, en Bonnet, Alberto y Piva, Adrián, *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*, Buenos Aires, Peña Lillo – Ediciones Continente.
- Piva, Adrián (2011): “¿Fin de la clase obrera o desorganización de la clase?” en Bonnet, Alberto (comp.) *Debates sobre la Argentina reciente*, Peña Lillo – Ediciones Continente, Buenos Aires. (En prensa)
- Piva, Adrián (2011b): “Una aproximación a los cambios en la Forma de Estado en Argentina (2002 – 2009)”, en *Revista Theomai*, número 23, 1º semestre, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.
- Scolnik, Fernando (2009): “El movimiento obrero argentino entre dos crisis: las organizaciones de base antiburocráticas en el área metropolitana de Buenos Aires durante el período 2003-2007”, en *Revista Conflicto Social*, año 2, número 2, diciembre de 2009, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
- Svampa, M. y S. Pereyra (2003): *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Biblos.
- Svampa, Maristella (2008): “Argentina: una cartografía de las resistencias 2003 – 2008”, en *Revista OSAL*, año IX, número 24, octubre, CLACSO.
- Svampa, Maristella (2008b): *Cambio de época, movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires, Siglo XXI.